

Costa Rica: la inevitable transición

Luis Guillermo Solís Rivera: catedrático de la Universidad de Costa Rica. Fue investigador en la Universidad de Michigan y de Miami. Integra el consejo editorial de las revistas *Foreign Affairs en Español* y *Global Governance*. Fue jefe de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores y embajador para asuntos centroamericanos de su país.

Nota: el artículo se terminó de escribir a mediados de enero, 20 días antes de las elecciones.

El desafío más allá de los objetivos electorales

Previsibles o no, los resultados de los comicios del 5 de febrero 2006 plantean a la más antigua de las democracias centroamericanas una serie de desafíos que podrían resultar decisivos para la definición primero, y la construcción después, de un nuevo modelo político capaz de superar -sin desechar sus logros- el Estado Benefactor que le dio estabilidad y progreso al país desde su última guerra civil, en 1948.

Paradójicamente, tales retos tienen poco que ver con las personas o los partidos que resulten ganadores en la contienda política, incluso si, como todo indica, el ex presidente Oscar Arias logra su objetivo sin necesidad de concurrir a una segunda vuelta, como ocurrió en las elecciones del 2002. En efecto, si bien muchos han querido reducir los desafíos de la Costa Rica contemporánea a la recomposición del liderazgo presidencial y la obtención de una cierta hegemonía legislativa, lo cierto es que la realidad del país supera esa visión.

Lo que está en juego, más allá de los objetivos electorales de corto plazo, es la naturaleza y la dirección de una transición política inevitable que, más pronto que tarde, obligará al conjunto de las fuerzas sociales, políticas y productivas a adoptar decisiones que sólo podrían calificarse de radicales. El radicalismo siempre produce incertidumbre y, en ocasiones, puede generar violencia. Incluso en Costa Rica.

Un poco de historia

Costa Rica ha gozado, hasta hace poco tiempo, de una sólida reputación democrática. A diferencia de los demás países de América Central, esta pequeña nación de 50.000 kilómetros cuadrados y escasos 4 millones de habitantes fue capaz, en medio siglo, de construir un modelo de desarrollo en donde la democracia política y el capitalismo fueron capaces de convivir en un marco de estabilidad social sólo conocido en los sistemas occidentales de alto ingreso.

El “milagro” costarricense, excepcional en casi toda América Latina, fue el resultado de cuatro condiciones concurrentes: a) la decisión de las élites nacionales, tras la derrota de los sectores más conservadores en el conflicto armado interno en 1948, de preservar y ampliar el sistema de garantías sociales establecido desde mediados de los años 40 y, en particular, la existencia de una amplia red de salud pública y pensiones que llegó a tener cobertura universal; b) la promoción de un extendido y poderoso sector estatal con significativas potestades regulatorias en materia de servicios públicos y finanzas, construido a partir de un modelo keynesiano de corte progresista que estimuló el desarrollo de una economía de mercado basada tanto en las exportaciones tradicionales –café, banano, caña de azúcar y carne- como en las pequeñas y medianas empresas agroindustriales; c) la ampliación de la pequeña burguesía rural y urbana (la llamada “clase media”) y su cooptación política por medio de su organización sectorial, gremial y comunal a partidos “de centro” que inhibieron el desarrollo efectivo de opciones viales en los extremos del espectro ideológico; y d) el mantenimiento de una clara alianza con EEUU durante los años de la Guerra Fría, alianza que, sin embargo, se dio en un marco de desmilitarización real (Costa Rica abolió sus fuerzas armadas desde 1948) y, más aún, fue capaz de sobrevivir a conflictos significativos con las posiciones de Washington en temas cruciales como, por ejemplo, la resolución de la crisis centroamericana de los 80.

Cambia la marea

Dicho modelo, “ideal” en el contexto regional, fue abandonado gradualmente a partir de la década de 1980, al calor de las reformas estructurales puestas en boga por las corrientes neoliberales. Aunque en Costa Rica su impacto fue mucho más lento que en el resto de América Latina, lo cierto es que, tras dos décadas y media de aplicación sistemática, los resultados de dichas políticas terminaron

desmantelando aquel modelo. Y hoy, si bien se mantienen algunos de sus elementos básicos (como por ejemplo el seguro social, la desmilitarización y la democracia formal), la mayoría de los factores esenciales del Estado Benefactor han sido abandonados o debilitados hasta desaparecer. Tal es el caso de buena parte del marco regulatorio del Estado, del financiamiento de los servicios públicos -algunos de los cuales se han privatizado o serán privatizados próximamente, como el sector de telecomunicaciones y energía- o la promoción de las pequeñas y medianas empresas industriales y agrícolas que han sido abandonadas a su suerte tras la adopción de un esquema productivo "abierto", basado en la promoción de exportaciones, que favorece a la gran inversión transnacional. La inminente ratificación del Tratado de Libre Comercio con los EEUU es la mejor prueba de este fenómeno.

Las consecuencias sociales y políticas de esta transformación son dramáticas: el país se ha polarizado, y experimenta un proceso de creciente y acelerada exclusión social y deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los habitantes. Más del 25 % de la población costarricense sobrevive por debajo de la línea de pobreza (es decir, con menos de 2 dólares al día); más del 50 % de la población económicamente activa trabaja en el sector informal; el 40% de los jóvenes en edad escolar se encuentran fuera de las aulas. Datos recientes revelan la existencia, en los alrededores de San José, de 63 barrios marginales que carecen de los mínimos servicios públicos. Como corolario de todo ello, no se detiene el flujo migratorio desde Nicaragua, que ya representa entre 400 y 600 mil personas (es decir, un número equivalente a más del 10% de la población total del país). Estos migrantes, si bien se encuentran trabajando, lo hacen en condiciones laborales de muy dudosa legalidad y alta precariedad, y casi no cotizan a los regímenes sociales, ya de por sí muy menguados por las altas tasas de evasión y corrupción: el Ministerio de Hacienda prevé para el 2006 una evasión del impuesto a la renta cercana al 70%.

Las elecciones y la realidad

En las elecciones del 5 de febrero de 2006, se definirá al presidente para el período 2006-2010, a la totalidad de los diputados a la Asamblea Legislativa (congreso unicameral de 57 miembros) y a los concejales o regidores y municipales de los 81 cantones del país. El panorama electoral plantea un escenario de transición estructural y sistémica. Es decir, serán el fin del ciclo político iniciado a finales de la década de 1940, cuya evolución positiva no está asegurada y más bien podría preludiar, como en otras ocasiones en la historia costarricense, un panorama de

turbulencia social e inestabilidad política sin precedentes desde hace más de medio siglo.

Aún si se descartan los pronósticos más catastróficos (por ejemplo, la posibilidad de que se produzcan en el corto plazo alzamientos sociales altamente violentos como los que han afectado a Argentina, Bolivia o Ecuador), la naturaleza de la crisis es tan profunda que es difícil imaginar salidas que no pasen por la puesta en ejecución de acciones democráticas pero verdaderamente radicales que, construidas a partir de un nuevo pacto social amplio, pluralista e inclusivo, modifiquen el actual régimen de dominación y sus nefastos esquemas de concentración creciente del poder económico, financiero y político. Eso no es lo proponen los principales partidos y sus candidatos con posibilidades de ser electos el 5 de febrero: Oscar Arias, del Partido de Liberación Nacional (PLN), y Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC). Para ellos, todo se reduce a hacer *"politics as usual"*.

El problema es que la realidad de Costa Rica no permite hacer cálculos políticos al estilo clásico. El viejo orden bipartidista, conformado por el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que garantizó la estabilidad a un elevado costo ético por varias décadas, se ha roto. Los grados de legitimidad del sistema político, aunque todavía altos en comparación con los de otros países de América Latina, sufren un deterioro sostenido desde hace más de diez años. La elevada percepción de corrupción, sumada al descrédito de la clase política promovido de manera para nada accidental por los medios de comunicación más conservadores, constituyen un caldo de cultivo nada propicio para la refundación de la República. En especial, si tal refundación ha de producirse en un contexto internacional como el presente, cuyo factor dominante, EEUU, impone una hegemonía que limita los márgenes de autonomía relativa para lograr la diversificación de los vínculos de Costa Rica con el resto del mundo.

La salida de un pacto social

De todo eso se concluye que las elecciones de 2006 serán algo más que un simple ejercicio cívico. Más allá de si Arias es elegido presidente, la clave es averiguar si las nuevas autoridades profundizarán el modelo actual sin diálogo social, lo que, habida cuenta de las alianzas dominantes que se vislumbran, es lo más previsible. Muy pronto, entonces, podrían generarse problemas en las calles. La inminente

ratificación del Tratado de Libre Comercio con EEUU agudizará muchas de las tendencias excluyentes ya descritas y, con ellas, la polarización del país sin que se cuente con un mapa que oriente el tránsito por esa *terra incognita*.

El Partido Acción Ciudadana, que lleva a Ottón Solís como candidato, es la principal fuerza opositora al modelo predominante, pero es también un movimiento ecléctico en lo ideológico y heterogéneo en su base social, de corte esencialmente reformista pero todavía poco claro en cuanto a su propuesta alternativa al *status quo*. Si llegara a ganar, la estabilidad tampoco estaría asegurada. En efecto, más allá de la retórica electoral, lo cierto es que dicho partido tendría que gobernar en el marco de un modelo en crisis cuya sustitución lo obligaría a abrirse a una convocatoria que hasta hora no ha realizado. Por el contrario, esta apertura podría reducirse aún más si, como todo parecería indicar, se produce una fragmentación significativa en el Congreso. Lo mismo sucedería si se rechazara el TLC, si éste no pudiera renegociarse, o si no se encontraran opciones reales para colocar las exportaciones costarricenses (alrededor del 50%) que en la actualidad se dirigen a EEUU. Lo mismo ocurriría si no se lograra a atraer las inversiones necesarias para al menos sostener los niveles de empleo y productividad. O para contrarrestar la competencia de los demás países centroamericanos, hoy sólidamente cohesionados en torno al proyecto económico y geopolítico de los EEUU en la región.

¿Dónde, entonces, está el *quid* de la cuestión? Pareciera que no hay salida sin pacto social, y que no habrá pacto social sin voluntad política de las élites, más allá de las elecciones, y quizás a pesar de sus resultados. Ello no debería ser difícil en un país que, desde la independencia en 1821, ha sido históricamente proclive a ése tipo de ejercicios consensuales. Sin embargo, lo que debería ser algo natural se ha complicado porque dichas élites, las más poderosas de las cuales se han transnacionalizado y son hoy ricas e invulnerables, se muestran autistas y arrogantes frente a los nuevos desafíos que enfrenta el país. En este panorama, la ausencia de la sensibilidad que en otros momentos permitió evitar la violencia y negociar un curso moderado podría reforzarse tras los comicios del 2006, en el marco de un engañoso triunfo electoral.

Dice uno de los lemas del PLN para la campaña 2006, en referencia a su candidato, Oscar Arias: “el barco necesita capitán”. Cabría preguntarse: ¿para qué si el barco se está hundiendo? ¿Qué pasa si se contrata al capitán equivocado, o si el capitán se emborracha después de contratado? Lo que sí está claro es que en ningún caso

-aún si se cuenta con barco y con capitán- se puede navegar sin tripulación. Por eso, en las elecciones del primer de febrero del 2006, los costarricenses harán bien en asegurarse de que no se haga realidad aqué otro dicho español, que postula que “donde manda capitán, no manda marinero”.